



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, junio 3 de 2021

Radicado: 05001 31 05-009-2016-00808-02
Demandante: MARIELA DE JESÚS HINCAPIÉ VALLEJO
Demandado: COLPENSIONES Y LA AFP PORVENIR SA
Asunto: APELACIÓN DE AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS

El TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, se constituyó en audiencia pública con el fin de emitir la correspondiente decisión, respecto a la apelación del auto que declaró en firme la liquidación de costas.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiénose el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, doctor **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**.

ANTECEDENTES

Dentro del proceso de referencia, se pretendió la declaratoria de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, a efectos de retornar al RPM y como consecuencia de ello acceder a la pensión de vejez. Pretensiones que fueron reconocidas en primera instancia declarando la ineficacia de la migración de régimen, se dispuso la transferencia de los recursos captados por la AFP accionada, con el consecuente efecto para Colpensiones de reactivar la afiliación de la accionante y el reconocimiento de la pensión de vejez, causada desde el 10

de noviembre de 2016 (audiencia del 11 de octubre de 2018 – fls 184/185), decisión que fue modificada en sentencia de segunda instancia, extendiendo los extremos de causación del retroactivo pensional hasta la fecha de la decisión de segunda instancia y manteniendo las demás consideraciones y conclusiones del A quo, gravando en costas en segunda instancia a la APF Porvenir al ser vencidos los argumentos de disenso.

Posteriormente fueron liquidadas las costas procesales, que comprendió las agencias en derecho en primera instancia por valor de \$2'343.726 y la suma de \$877.803 como agencias en derecho en segunda instancia (fl. 202)

Inconforme con el importe de la condena fue controvertida por la AFP Porvenir, ya que a su juicio no se tuvieron en cuenta las reglas del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, donde tratándose de condenas por obligaciones de hacer se establece un máximo de 4 SMLMV, empero se desconoció que esta accionada obró de buena fe, por tanto su adjudicación no debió hacerse en el extremo superior del rango

Decisión mantuvo la A quo, al considerar que la condena fue ajustada a derecho, por lo que se concedió el recurso de apelación (fl. 207/209).

ALEGATOS

Concedido el término establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 ninguna de las partes presentó escrito alguno.

CONNSIDERACIONES

En los términos del artículo 365 del C.G.P, se grava con costas a la parte que resulte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, las excepciones previas, entre otras.

Ahora bien, sobre la forma en que se fijan las agencias en derecho, dispone el mismo artículo que la condena en costas se incluye en la misma actuación que dio lugar a ellas, pero la determinación del monto de las agencias, se reserva para un momento posterior, una vez esté ejecutoriada la decisión; liquidación efectuada por la secretaría y posteriormente, aprobada por el Juez. (Artículo 366 C.G.P)

Acorde con el artículo 365 del C.G.P aplicable en materia laboral, por remisión que hace el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S, ha de entenderse que la liquidación de costas comprende los gastos del proceso y las agencias en derecho, según las tarifas establecidas, que para este caso dada la fecha de inicio del trámite judicial (3 de junio de 2016), se regulan en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fijando los rangos para liquidación de agencias en derecho; específicamente para los procesos ordinarios laborales estableció:

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

Única instancia. *Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Primera instancia. *Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia. *Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO. *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Adicional debe tenerse en cuenta que, para efectos de establecer el valor de las agencias en derecho, el funcionario Judicial habrá de moverse dentro de los rangos permitidos en la norma, atendiendo a criterios como la calidad y duración del proceso, las gestiones del apoderado, cuantía de la condena, entre otros aspectos.

En **el caso concreto** se advierte que el trámite judicial tuvo un devenir prolongado, ya que la fijación de audiencias judiciales fue bastante distante; empero una vez arribada la fecha de la diligencia se agotaban las etapas programadas, emitiéndose la decisión de fondo en la misma oportunidad. A continuación, y producto del disenso de la AFP Porvenir y por mandato del artículo 69 del CPTSS se surtió una segunda instancia, sin que ninguna de las réplicas de la recurrente fueran acogidas, dando lugar a la confirmación de la declaratoria de ineficacia del traslado entre regímenes y reconocimiento pensional, con el consecuente recálculo de las mesadas pensionales adeudadas.

Valorados estas características y de cara a los aspectos expuestos por el recurrente no se identifican argumentos que lleven a modificar la condena en agencias en derecho, no solo porque el monto asignado que corresponde a 2.6 veces el SMLMV para el año 2020, se halla dentro del rango asignado para las

condenas por obligaciones de hacer prestaciones de tracto sucesivo (hasta 4 SMLMV), sino que el mismo recompensa los factores propios del caso analizado, sin que situaciones como la referida “buena fe” tengan incidencia en la condena a imponer en tanto su carga es una consecuencia legal al resultar vencido en un proceso o recurso. Al respecto la Sala de casación Laboral de la CSJ en decisiones AL 3407 de 2020 y AL 4123 de 2019 expresó:

“Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que las costas no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de allí que no interese para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe, diligente o negligentemente. Ello por cuanto actuar con probidad y sensatez es un deber que se le exige a toda persona que acude a la justicia a reclamar un derecho, de allí que las costas derivan objetivamente del resultado de un proceso o recurso formulado y, bajo esa lógica, simplemente quien sea vencido deberá asumir su pago”.

Así las cosas, se mantendrá la cuantificación efectuada por el A quo, despachando desfavorablemente el recurso de apelación.
Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en estados, y se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen.

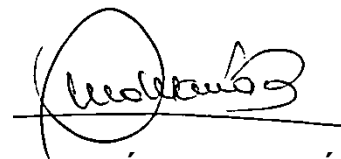
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 98 publicados por medios digitales el 8 de junio de 2021